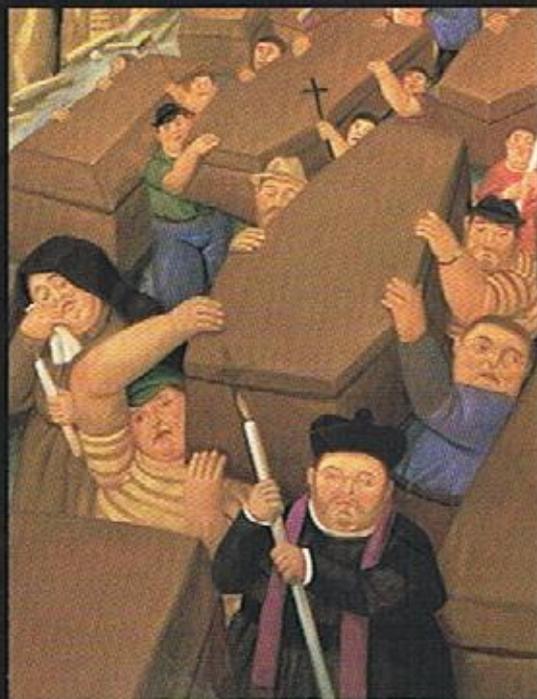


Violencia pública en Colombia, 1958-2010

MARCO PALACIOS



MARCO PALACIOS ROZO (Bogotá, 1944) es profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes; es Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias; recibió el título de abogado en la Universidad Libre de Colombia y el doctorado (*Políticos*) en la Universidad de Oxford.

Su libro *¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930* fue coeditado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de los Andes (Colombia, 2011). También publicó *Entre la legitimidad y la violencia* (Norma, 1995), traducido al inglés (Duke University Press, 2006) y *El Café en Colombia, 1850-1970. Una historia social, económica y política* (Cambridge University Press, 1980), editado también en cuatro distintas versiones en español.

Ha sido director, coordinador y compilador de seis libros académicos colectivos de historia y política contemporánea sobre América Latina y Colombia, publicados en Bogotá, Ciudad de México y Madrid.



Colombia es conocida por el conflicto armado. Así, la gran pared del Museo de la Cruz Roja Internacional de Ginebra que registra anualmente los hechos de guerra y paz en el mundo, trae, desde 1948, la expresión *Colombian troubles*. También se sabe que, independientemente de la pureza de las intenciones o de su claridad estratégica, los procesos de paz con las guerrillas o con los paramilitares se enredaron y terminaron en sainete. Quizá porque han concebido la paz como un medio para incrementar su poder, los políticos que manejan el Estado y los jefes guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares, han demostrado ligereza en sus diálogos de paz, incluso, cuando combaten y ponen a la población inerme entre las balas.

Violencia pública en Colombia, 1958-2010, enfoca con particular intensidad las élites del poder y las que buscan desalojarlas empleando el método de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. Escenario en el que los jefes de organizaciones de narcotraficantes, paramilitares, o su combinación, se ponen del lado del orden establecido. La interpretación que procura este libro es una de tantas posibles. Siguiendo a vuelo de pájaro la trayectoria del conflicto armado, busca coordenadas que lo sitúen en la historia de la formación inconclusa del Estado-nación, de la cual suele relegarse, erróneamente, la dimensión internacional. En este sentido, el texto subraya el límite de la soberanía nacional colombiana: la subordinación pragmática de las élites del poder a los grandes paradigmas y políticas de Washington: la Guerra Fría, la guerra a las drogas, la guerra al terrorismo y al crimen organizado.



ÍNDICE

Listado de siglas y acrónimos utilizados en esta obra.....	15
Prólogo.....	17

CAPÍTULO I

Palabras, momentos y lugares de un conflicto armado inconcluso.....	25
Palabras.....	27
La Violencia, ¿"revolución social frustrada"?.....	28
Después de Guzmán et al.....	32
La violencia y las guerras civiles del siglo XIX.....	34
El Leviatán, El Carnero y la cinta de Moebius.....	36
Momentos.....	41
La tradición política colombiana.....	41
La Guerra Fría y nuevos conceptos de las ciencias sociales.....	47
Oligarquía, populismo, clientelismo.....	50
Lugares.....	52
"Tres países".....	56
Ciudad-campo-ciudad.....	61
Descentralizar y relegitimar el Estado.....	63

CAPÍTULO II

Guerra Fría y revolución.....	67
En los comienzos: Frente Nacional y Revolución cubana.....	67
La división del "movimiento comunista internacional" y la izquierda marxista.....	68
"La Sierra Maestra en los Andes".....	69
Cuba y las dos caras de la Alianza para el Progreso.....	72
El Frente Nacional ante el nuevo desafío revolucionario.....	74
Castrismo: la "teoría" del foco guerrillero.....	75
Sobre los orígenes del ELN.....	78
La presión cubana y el liderazgo del ELN.....	82
Consejos de guerra.....	85
Adiós a Fabio: cierra la primera década del ELN.....	87

Los comunistas y la lucha armada.....	89
Las FARC y el PCC.....	95

CAPÍTULO III

<i>Guerra a las drogas, escalamiento y guerra sucia</i>	99
Introducción.....	99
Economía y poder.....	101
Breve contrapunteo entre Colombia y México.....	106
La porosidad geográfica: nichos y fronteras internacionales... ..	109
Guerrillas y narcos: dos imágenes sociales.....	110
La "inocencia" de los orígenes del narcotráfico: el mundo Marlboro.....	112
De los esmeralderos a los reyes de la cocaína.....	113
Drogas y léxico.....	115
Las guerras del cartel de Medellín.....	119
La izquierda armada y el aciago experimento de la Unión Patriótica.....	122
La zona de despeje del Caguán, ¿una radiografía territorial de las FARC?.....	128
Elección de alcaldes: el nudo de la guerra.....	130

CAPÍTULO IV

<i>Paz cuatrienal</i>	137
Contextos de la paz presidencial.....	138
Betancur, agosto de 1982-junio de 1985.....	142
Betancur, junio de 1985-julio de 1986.....	144
Virgilio Barco, agosto de 1986-agosto de 1988.....	145
Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994.....	146
La ruptura con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.....	150
Samper (1994-1998): la paz en el limbo.....	151
Pastrana: los límites de las políticas de paz.....	158
Tire y afloje.....	161
Algunas consecuencias del Caguán.....	163
El Plan Colombia, la seguridad de Estados Unidos y la política colombiana.....	165
Contra el Caguán.....	167

Uribe en Santa Fe de Ralito.....	169
La dinámica de la confrontación con las FARC durante el uribismo	174
<i>Epílogo</i>	185
<i>Anexos</i>	193
<i>Referencias</i>	197

que Colombia, y también más expuesto a la cultura de Estados Unidos.

Guerrillas y narcos: dos imágenes sociales

La urbanización, secularización y transición demográfica del último medio siglo produjeron un profundo cambio cultural y de valores desde el cual puede comprenderse la diferencia de percepciones y actitudes colombianas en relación con guerrillas y narcotráfico. A diferencia del mundo guerrillero, que ideológicamente se visualiza como si estuviera plantado en "el corazón de las tinieblas", el mundo de las drogas se sintoniza con actitudes y mentalidades individualistas y hedonistas que, por ejemplo, se apropian de *la salsa democrática*,¹⁶ la algarabía de las discotecas, la intensidad contagiosa de la vida nocturna; todo esto a la par de las exigencias y presiones psicológicas del éxito rápido y las modas, el ansia de velocidad con estilo (como los *Ree-*

¹⁶ International Crisis Group, (icg), *Latin American Drugs I. Losing the Fight*, mayo de 2008, pp. 11-14; 17-19; 29-34. La tensión de la frontera con Venezuela, aún no resuelta, data del siglo XIX. Martz, (1992).

¹⁷ icg, *Latin American Drugs*, pp. 6-27.

¹⁸ La expresión es de Quintero Rivera, (1998, pp. 311-341).

boks, las metralletas *Uzi* de los *sicarios* o los caballos de paso de los *señores*), y el reconocimiento de la fugacidad de todo cuanto existe, incluidas las relaciones afectivas, excepto, quizás, el amor a la madre, sacralizado dentro del patrón machista del "buscador de miedo" (Salazar & Jaramillo, 1996, pp. 116-120). Estos son los laberintos de *La Virgen de los sicarios*, novela en que Fernando Vallejo descifra la semántica y las pasiones del fenómeno; la violencia simbolizada que recorre a lo largo y ancho, de arriba abajo, la sociedad competitiva, fragmentaria y desigual que es Medellín.¹⁹

Encargado de negociar el rescate de un cuñado suyo, cautivo en un camбуche o escondite selvático del ELN, el historiador Herbert Braun observó, en medio de la campaña terrorista de los carteles en 1988, que la juventud metropolitana de Colombia percibía las guerrillas como fenómenos irrelevantes, organizaciones lentas, dinosaurios rumiando el pasado en las espesuras de la selva, en contraste con los narcotraficantes que, pese a todo, eran ágiles, estéticos, orientados sagazmente hacia el capital, el consumo y el futuro; ejemplares puros de movilidad social en una sociedad relativamente cerrada y mezquina. Braun concluyó que, al menos en esos sectores urbanos de la sociedad colombiana, la guerrilla estaba muerta, acabada. Infirió que era un actor público incapaz de ofrecer alguna alternativa pública creíble.

Los políticos no quieren deshacerse de la guerrilla porque, así, siempre pueden preguntar a la gente si prefiere el sistema actual o una nación gobernada por la guerrilla, sabiendo perfectamente que la mayoría de los colombianos considerarán a los políticos como la mejor opción entre las dos [...]. Los guerrilleros saben que con la paz dejarán de existir. Sin las armas no podrán competir con otros que buscan el poder en cientos de pequeños caseríos en toda Colombia (Braun, 1994, p. 65).

Precisamente porque la guerrilla ya no parecía revolucionaria, sino burdamente redistributiva, las élites podían convivir con ella: "las élites ven a los demás colombianos tan claramente inferiores, tan diferentes, que realmente el temor [a las guerrillas, M. P.] es lo único que las une con los pobres" (p. 64). Braun nos muestra aquí, de cuerpo entero, uno de los problemas acuciantes que enfrentan los investigadores: el poco acceso directo "al corazón de las tinieblas"; el recurso a basarse en el relato mediado de las víctimas, de las ONG, —casi siempre humanitarias—, de los reportes de expertos, —redactados en las salas de agencias gubernamentales o internacionales—, o en las conversaciones corrientes de los jóvenes en los bares de las grandes ciudades que discurren con puntos de vista, literalmente diferentes, de las de sus contemporáneos y adolescentes de cientos de lugares cercanos a la confrontación

¹⁹ Las similitudes y diferencias de estos entramados con la camorra napolitana, según Roberto Saviano, debieran ser objeto de investigación.

militar. La imposibilidad práctica del acceso directo a las guerrillas por dentro o a las bandas paramilitares es un problema que no podrá resolverse satisfactoriamente en el presente y que limita el conocimiento.

*La "inocencia" de los orígenes
del narcotráfico: el mundo Marlboro*

Aunque Colombia ingresó tarde al mercado internacional de drogas ilícitas, las organizaciones de contrabandistas, con protección política regional y nacional, ostentaban una tradición. Tal es el caso de las bandas centralizadas de esmeralderos, con sus guerras y pactos, o de la cadena de importación ilegal y venta callejera de cigarrillos Marlboro, todas sentaban precedentes, ejemplos a imitar.²⁰ Colombia apareció en los radares de las agencias antidrogas de Estados Unidos durante el gobierno de Alfonso López Michelsen; en 1978 alcanzó proporciones de escándalo a raíz de "revelaciones" en la prensa norteamericana, durante las elecciones presidenciales en las que salió a relucir el nombre de Julio César Turbay Ayala —el candidato favorito y presidente desde 1978 hasta 1982—, por supuestas conexiones con los narcotraficantes que luego fueron desechadas por el mismo gobierno estadounidense. De todos modos quedó en pie la idea que el despegue de la economía de la droga en Colombia se había hecho con base en un círculo del que participaban miembros del Congreso y varios ministros. En ese momento, Colombia ya era conocida en Estados Unidos por la alta calidad de su marihuana gracias, en parte, al efecto "colchón de aire", es decir, a la fuerte represión a los cultivos en México.

Pese a todo esto, el gobierno y las élites empresariales colombianas no se percataron del cambio de política antidrogas en Washington y manejaron una especie de entendido según el cual "el problema de las drogas" no era de Colombia sino de Estados Unidos cuando precisamente en Washington se había detectado la maraña que facilitaba el lavado de dinero: a) la "ventanilla siniestra"; b) las amnistías tributarias y c) laxitud con prácticas de registro de exportaciones ficticias o "sobrefacturadas".²¹ Por tanto, presionó al gobierno colombiano a imponer controles y reformar los códigos en materia penal. Más importante, se le indicó que debía militarizar la lucha contra las drogas y firmar un tratado de extradición.

La presión hizo enmendar la plana y precipitó la participación directa del ejército en la erradicación de los cultivos y en la interdicción del trasiego en la franja caribeña Barranquilla-Santa Marta-Maicao. En los operativos se introdujo por primera vez el método de las fumigaciones aéreas (Paraquat).

²⁰ Sobre esmeralderos, ver, Uribe Alarcón, (1992).

²¹ Sobre estas, ver, Junguito & Caballero, (1982); Steiner, (1996).

En 1980 el Congreso colombiano aprobó un Tratado de Extradición con Estados Unidos, pactado desde el año anterior. Sin embargo, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) invocó convicciones de "filosofía política" para no aplicar la cláusula de extradición de nacionales, con lo que dio más fuerza a una idea que empezaba a elaborarse en Estados Unidos: el "narco-Estado", la "narco-democracia". Pese a todo, los comandantes de las Fuerzas Armadas colombianas tenían fuertes reservas frente a la línea trazada por Turbay. Su "enemigo interno" era: el ELN, las FARC y el EPL que, por esos años se reorganizaban y crecían. Para colmo, ganaba audiencia una guerrilla urbana, publicitaria, juvenil, el M-19 que, por todo esto, podría ser más peligrosa. Otro criterio de fondo los apartaba de la línea presidencial, la participación directa en la lucha antidrogas traería dos efectos negativos: impopularidad en las zonas campesinas de cultivo y corrupción en sus filas. De este modo, en 1981 las Fuerzas Armadas consiguieron que la Policía Nacional fuese la fuerza encargada de combatir el narcotráfico. A partir de entonces esta hizo un complicado y costoso aprendizaje organizacional, cuyos hitos más importantes fueron la creación, en la División Operativa, de un cuerpo antinarcóticos, del que, en 1987, habría de salir la Dirección Nacional de Antinarcóticos. En 1989, a raíz del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, se creó un Cuerpo Especial Armado para dismantelar las organizaciones de sicarios bajo el mando de la Dirección General de la Policía, unidad que, al parecer fue infiltrada por los narcotraficantes.²² Estas experiencias llevarían a formar más tarde el ubicuo *Bloque de Búsqueda*.

Volviendo a la marihuana, la presión diplomática norteamericana, la represión interna y la visibilidad nacional e internacional de las feroces guerras internas de los clanes guajiros involucrados en el negocio, elevaron los costos de transacción al punto que los cultivos se desplazaron a cientos de kilómetros, al Cauca, en el suroeste del país. Allí comenzaron nuevas operaciones de fumigación aérea que se intensificaron a lo largo de la segunda mitad de la década de 1980 hasta que la sustitución de importaciones de marihuana en los Estados Unidos, (con una variedad más potente) dio al traste con las exportaciones de *cannabis* colombiana.

De los esmeralderos a los reyes de la cocaína

Las experiencias de las esmeraldas, la marihuana y el contrabando de Marlboro, dejaron al narcotráfico importantes lecciones de construcción empresarial y operativa. A principios de la década de 1970 había empezado a operar, en pequeña escala, el negocio de las exportaciones de cocaína a Estados Unidos, y grupos locales de Cali y Medellín importaban *pasta base* o *pasta*

²² Decreto 814 del 19 de abril de 1989.

del Perú y Bolivia para transformarla en alcaloide y exportarlo (Crandall, 2002). Por esos años se presentó una de las más graves depresiones mundiales de la economía cafetera y los cocaes clandestinos de la región amazónica recibieron trabajadores expulsados del café y del algodón, cuya producción había caído, además, gracias a la liberalización comercial. Simultáneamente empezó a florecer la amapola opiácea en los pisos térmicos fríos de la región andina, incluido el Eje Cafetero.

El circuito principal de la cadena de valor de la cocaína colombiana ha sido el de Andes-Estados Unidos, primero por la vía del Caribe (por ejemplo: Medellín-Miami) o de México (Cali-Tijuana) y, recientemente, por el océano Pacífico, con escalas en Centroamérica y México. En la primera década del siglo XXI emergió un segundo gran circuito: Amazonia-Brasil-África-Europa. Esos cambios en la geografía del comercio repercuten inmediatamente en los desplazamientos locales y regionales de los cultivos y en el rediseño de corredores y cadenas de comercialización dentro de Colombia. En este aspecto importa subrayar una característica específica de Colombia, —en cierto modo similar a Brasil pero diferente de México—, al entrar al siglo XXI continúa expandiendo sus fronteras interiores, principalmente en los espacios periféricos a la región andina: al oriente la Orinoquía y la Amazonia y al occidente la franja del Pacífico. Las formas de ocupación territorial, en un sistema de fronteras sucesivas que lleva siglos mantiene continuidades; verbigracia se “organiza” a partir de núcleos urbanos y tienden a reproducir el orden social dominante, con sus estratificaciones y orientaciones, pero sus métodos y configuraciones cambian conforme a las pautas culturales y económicas. Esa conquista permanente de nuevos territorios plasma grupos sociales, empresariales o políticos con una propensión a socializarse en situaciones de poder fáctico, distanciados del poder estatal y de su orden legal. En contadas excepciones, desde el período republicano al presente, las colonizaciones colombianas han sido individualistas y espontáneas. El Estado llega después de los pioneros, sean colonos pobres o empresarios colonizadores o de otro tipo. Las escuelas, los centros de salud, las mismas autoridades políticas, los policías, los jueces, los notarios, los sacerdotes o los bancos, llegan después que los asentamientos se han organizado conforme a sus propias reglas, por ejemplo, a formas peculiares de “loteo” de predios. En estas condiciones se ensanchan los hiatos de la “geografía de la ley” y la “geografía del crimen” (Synder, 2009). De allí la facilidad de incorporar amplios territorios a la economía ilícita de las drogas, puesto que los habitantes han formado su propio entorno físico y social, no retan abiertamente los principios de legitimidad política del Estado y aunque marginados de la red vial nacional se comunican por ríos y afluentes desatendidos por la cartografía estatal. Esos territorios, generalmente ubicados en las fronteras internacionales, pueden transformarse en nichos ideales para las guerrillas, el contrabando tradicional o el cultivo, procesamiento químico y transporte

aéreo de drogas ilícitas. La tecnología contribuye: la construcción de pistas aéreas, legales e ilegales, de la década de 1970 en adelante, y la telefonía móvil de mediados de la década de 1990 en adelante, abatió parcialmente las distancias y permitieron coordinar y planificar mejor la panoplia de actividades económico-criminales.

Con el tiempo, la economía política de la droga desarrolló una tensión urbano-rural. El modelo de hegemonía urbana de Barranquilla con la marihuana y de Medellín y Cali con la cocaína y la heroína, pareció alcanzar el cenit con los carteles mafiosos de Escobar y los Rodríguez Orejuela. En esas capitales departamentales se formaron los nodos, jerarquías y aparatos que tomaban las decisiones estratégicas, empresariales y criminales, que manejaban las inversiones, componían entramados de corrupción y extorsión con políticos, agentes del Estado y financistas y controlaban los territorios de los cultivos y los corredores de las mercancías (Krauthausen, 1998). Poco después se veía que la destrucción de los dos grandes carteles favoreció el ascenso de los jefes de los ejércitos paramilitares, hombres capaces de cambiar el orden jerárquico, pero forzados a establecer relaciones de poder cada vez más segmentadas (Duncan, 2006). A este respecto pueden citarse los ejemplos de los hermanos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), o las pandillas de "Don Berna" en Medellín, "la ciudad de la eterna balacera", una de las grandes capitales mundiales del círculo drogas-violencia de los últimos tiempos (Hylton, 2007). Algo específico de Colombia es que una vez acordaron la desmovilización formal (2003-2006), esos "ejércitos" aterrizaron suavemente a la actividad electoral e hicieron simbiosis en la subida y consolidación de los nuevos grupos de poder político (Romero, 2007). Sin embargo, como se vio, en Medellín, supuestamente apaciguada después del 2002, aparecieron nuevas manifestaciones de colaboración entre agentes del Estado central y bandas criminales con el objetivo aparente de "civilizar" la actividad criminal; es decir, el "cero tolerancia" a la violencia desembozada, en el sentido del mencionado "proceso civilizatorio".

Drogas y léxico

A comienzos de la década de 1980 nuevos vocablos como *cartel de Medellín*, *narco-guerrilla*, *extraditable* quisieron dar cuenta de la realidad evidente, pero aún indescifrable, del nexo entre drogas y violencia. En 1981 el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, miembro de una prominente familia del cartel de Medellín que, sobre la marcha, creó un grupo de matones liberándola sin daño: Muerte a Secuestradores, MAS, germen de una estructura más compleja y permanente que pronto se amplió y desarrolló operaciones militares con "poder de fuego" y movilidad. Así, el cartel negoció mejor con la policía, el ejército o con las guerrillas; con las FARC tuvo que pactar el acceso a los culti-

vadores de hoja de coca en el oriente colombiano, a las pistas áreas escondidas en claros de la selva, lo mismo que a sus cocinas o laboratorios.

Un cuadro de conflicto armado con cuatro guerrillas, cada una con personería propia, se exacerbó en la segunda mitad de la década de 1980 cuando los narcotraficantes retaron directamente al Estado y emprendieron campañas terroristas de violencia dosificada, selectiva e indiscriminada, contra la extradición a Estados Unidos.²³ De esos años en adelante la cocaína fue tan importante en el valor de las exportaciones colombianas como el café o el petróleo. En parte esto se debió a la rápida ampliación de los cultivos de coca y amapola en manos de colonos sobre los cuales las FARC solían tener algún ascendiente. En una entrevista de "Tirofijo" a la revista *Semana*, refiriéndose a los beneficios que sacaban las FARC de los cultivos ilícitos, respondió:

Ah, sí. De eso dicen que vivimos nosotros. Incluso la política oficial es que acabando con la coca dizque va a acabar con nosotros. Como si esa fuera la fuente revolucionaria de nosotros. En todos los documentos del gobierno se habla de eso, que acabando la coca se acaba el movimiento guerrillero. Resulta que las raíces del movimiento guerrillero no son la coca sino los problemas sociales, económicos y políticos de este país.²⁴

La influencia de las FARC sobre esos campesinos se comprobó durante el movimiento de cocaleros (1996) que si breve, fue una de las protestas agrarias más amplias de la historia del país (Ramírez, 2001), y no hubiera alcanzado las dimensiones, intensidad y proyección que tuvo sin mediar un decidido aunque tácito respaldo de las guerrillas.

Aunque la *narco-guerrilla* pareció tener un origen meramente incidental, la expresión exageraba la relación tenue y en todo caso potencial que existía en 1983-1984 entre las FARC, que controlaban algunas áreas en el Caquetá y permitían el cultivo de hoja de coca, y la construcción de pistas aéreas del narcotráfico a cambio de "impuestos", parte de los cuales estaban en el precio de sustentación que los traficantes debían pagar a los campesinos o a los intermediarios pueblerinos. El descubrimiento de *Tranquilandia* en el río Yarí, departamento del Caquetá dio más crédito al aserto. En aquel paraje selvático el cartel de Medellín había establecido un enorme complejo de laboratorios, viviendas y pistas para transformar la *pasta* peruana y boliviana y sacar la cocaína hacia el exterior. El término *cartel* no corresponde a la definición económica. Eran organizaciones clandestinas con un entramado de

²³ Palacios, (2000, p. 15-40); Arnsón & Cepeda Ulloa, (2001).

²⁴ *Semana*. "Tirofijo se destapa". (15 de febrero de 1999). Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/tirofijo-destapa/37832-3.aspx>

empresa y delito.²⁵ De estas el cartel de Medellín, conformado principalmente por Pablo Escobar, la familia Ochoa, Carlos Lehder y José Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano", fue el más violento y tuvo una base militar más ramificada y extendida que su gran rival de Cali. Pero,

No es lo mismo caracterizar al cartel de Medellín a través de la figura de Pablo Escobar que de la figura de Gonzalo Rodríguez Gacha. Las vidas de ambos hunden, por igual, sus raíces en un pasado de criminalidad común que le imprimió carácter a su actuación ulterior como grandes 'capos', pero en tanto que Escobar está más cerca del estereotipo del comerciante liberal, Rodríguez Gacha siempre hizo gala de ser más bien algo así como un hacendado ultraconservador y anticomunista (Orozco, 1992, p. 244).

El grupo de Cali, que muchos definen como una franquicia, operaba con base en empresas de fachada de los hermanos Rodríguez Orejuela. De todos modos los dos carteles aprendieron a conjuntar el trabajo de sicarios y abogados, las políticas de *plata o plomo* y, mediante campañas de terror y legalismo, doblegaron gobiernos y políticos profesionales.

Con apoyo de la DEA, la Policía Nacional copó las instalaciones de *Tranquilandia* (que estaban desiertas) y las destruyó. La acción fue coordinada por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que ya era el enemigo más decidido del cartel. Se dijo que la destrucción del complejo y de catorce toneladas métricas de cocaína era uno de los mayores golpes propinados al narcotráfico en el mundo. Escobar ordenó asesinar al ministro lo que se cumplió pocas semanas después, a fines de abril de 1984, en una avenida bogotana. Con base en incidentes como el de *Tranquilandia* el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, acuñó el término *narco-guerrilla* que hizo carrera hasta el presente. Aunque profético, el vocablo era excesivo en el contexto del momento. No había fundamento para asumir que las FARC protegían *Tranquilandia*. Además, la palabra *narco-guerrilla* opacaba el nexo orgánico de sectores de la clase política tradicional y empresarial con narcotraficantes como Escobar. Algunos políticos profesionales se enriquecían y obtenían financiamiento para sus operaciones electorales a cambio de servir de informantes calificados y ofrecer protección política; algunos empresarios aumentaban la rentabilidad y magnitud de sus operaciones mediante el lavado de dinero.

No puede soslayarse que la hostilidad de Tambs transmitía la oposición estadounidense al viraje de la política internacional colombiana. Con México, Costa Rica y Panamá, el gobierno de Betancur había formado el Grupo de Contadora, buscando una alternativa de paz y arreglo en Nicaragua,

²⁵ Cfr. Álvarez, F. (22 de noviembre de 1994). "Pablo Escobar. Memorias de un bandido". *Semana*, pp. 44-48; Krauthausen, (1998, pp. 43-161; 163-95; 251-321).

(eventualmente con El Salvador, en plena guerra civil) con base en una agenda política diferente a la del presidente Reagan. El giro colombiano era, para decir lo menos, inusitado, si se tiene en cuenta su fidelidad en la Guerra Fría. Venía, además, acompañado de iniciativas de amnistía y diálogos de paz con las guerrillas que enfrentaron la oposición abierta tanto en las cúpulas militares como en amplios sectores de las élites políticas y empresariales del país que se apropiaron del concepto *narco-guerrilla*, sosteniendo que correspondía a la realidad sobre el terreno pues en muchas localidades periféricas se había realizado la simbiosis de operaciones de los carteles de la droga y las FARC. Y en efecto, había lugares donde esas organizaciones adversas aparecían pragmáticamente unificadas en función del acceso a los recursos de las drogas ilícitas. Es algo irónico que, precisamente por esas fechas, empezaran a ejecutarse operaciones que al ser descubiertas en 1986 en el escándalo político conocido como *Irán-Contras*, mostraban a agentes del gobierno estadounidense (Oliver North) dirigiendo el contrabando de drogas ilícitas de los carteles de la droga en Centroamérica para obtener fondos y financiar operaciones de *la contra* nicaragüense.

Hasta el asesinato del ministro Lara Bonilla (abril de 1984) las élites del poder no parecieron percibir la amenaza de las organizaciones del narcotráfico para el orden político y social; en actitud de *laissez faire*, apreciaban el flujo de capitales que ingresaban al país y estabilizaban la tasa de cambio; pensaban que las pugnas sangrientas de los narcos se resolverían internamente, como había ocurrido con los *esmeralderos*. Sin embargo, el asesinato movió al presidente Betancur a dar un *timonazo* de 180 grados. En contra de sus "íntimas convicciones filosóficas", autorizó las primeras extradiciones de colombianos a Estados Unidos y lanzó las Fuerzas Armadas a "la guerra a las drogas", aunque estas respondieron tibiamente porque, de un lado, las predicciones sobre los costos políticos e institucionales de la erradicación de la marihuana se habían cumplido y, del otro, las relaciones civil-militares se habían tensado a un punto peligroso. Los altos mandos militares desaprobaban el manejo de la política de paz con las guerrillas y el tratamiento a los oficiales involucrados en acciones paramilitares anticomunistas en el Magdalena Medio. En esas circunstancias, la DEA ofreció pruebas de las actividades del cartel de Medellín y sus miembros se desbandaron a Panamá. Confiaban que el general Noriega que, complotaba con las operaciones de drogas y armas de Oliver North para derrocar a los sandinistas, les garantizaría un refugio tranquilo.

No fue así y pronto debieron retornar al país. En el interín se reunieron con el expresidente López Michelsen a quien entregaron un mensaje para el presidente Betancur quien, al recibirlo, envió a Panamá al procurador general de la Nación. De esas reuniones salió una declaración en la que, a cambio de amnistía por sus crímenes pasados y la abolición de la extradición, ofrecían desmantelar sus operaciones de droga, entregar toda la infraestructura

instalada y renunciar para siempre al negocio. Pero ni el ambiente nacional, ni Washington estaban dispuestos a escuchar si quiera una oferta semejante y Betancur la rechazó de plano. Del episodio nacieron "los extraditables" que, con la consigna "más vale una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos", declararon una "guerra total" al Estado colombiano y al gobierno de Estados Unidos. Muy rápido hallaron refugio en zonas de latifundio del Magdalena Medio, en el seno de ganaderos y narcotraficantes que contaban con apoyos locales del ejército, de la Texas Petroleum y de sectores de la población hastiados con la coacción del modelo de las FARC, a partir de los cuales diseñaron un nuevo modelo de organización paramilitar.

Las guerras del cartel de Medellín

Los narcotraficantes y en particular el cartel de Escobar libraron la guerra en tres frentes: contra el Estado, por la no-extradición; contra las FARC, por acceso a territorios y poder local y contra sus competidores de Cali. Luego, se despedazarían entre sí. Veamos.

Al finalizar la década de 1970 las guerrillas, especialmente las FARC, habían permitido cultivar hoja de coca en sus territorios y a lo largo de las dos décadas siguientes sus "frentes" regularon el funcionamiento de las cadenas locales: de los *raspachines* a los encargados de operar los vuelos de carga; de las cocinas o laboratorios químicos, a la venta directa de pasta y del alcaloide o a su trueque por armas. En esta confusa historia se fraguaron alianzas transitorias y guerras locales episódicas entre guerrillas y organizaciones de narcotraficantes. Por entonces había llegado a su cénit el modelo narcotraficante centralizado en las ciudades; las organizaciones mafiosas de Pablo Escobar y más tarde los hermanos Rodríguez Orejuela (1984-1993) lanzaron la mayor ofensiva terrorista contra el Estado y la ciudadanía de que se tenga noticia²⁶ con base en una técnica que combinaba el sicario y el paramilitar. El primero es un matón a sueldo (generalmente un adolescente) que opera en escenarios urbanos. El segundo se inserta, además, en el medio rural y combate las guerrillas en las luchas por controlar accesos a lugares considerados estratégicos. En este sentido es aliado potencial de la fuerza pública. Pues bien, el aparato militar del cartel de Medellín manejaba sicarios y paramilitares y a mediados de la década se sintieron con organización y poder de fuego como para retar a las FARC en sus propio terreno y en el campo electoral, tratando de aniquilar la Unión Patriótica, (UP), una alianza electoral de esa guerrilla y el Partido Comunista Colombiano.

²⁶ Pueden citarse dos buenos ejemplos de periodismo investigativo sobre estos dos grupos: Bowden, (2001); Chepesiuk, (2003).

Los niveles y naturaleza de aquella violencia cruzada, contra el Estado, sus competidores y las FARC, no tienen parangón, ni en el México de hoy. Asesinaron o secuestraron altos funcionarios del Estado, jueces de las Altas Cortes, periodistas, candidatos presidenciales, políticos, policías y sus familiares. La dinamita del cartel de Medellín dejó en escombros la sede de la policía secreta, DAS, y el periódico *El Espectador*. Hicieron explotar un avión comercial en vuelo en el que murieron los 107 ocupantes; estallaron más de 50 carros-bomba que dejaron más de 400 muertos, transeúntes inocentes, principalmente en Bogotá. Bajo el lema "haga patria, mate un policía" más de 200 agentes fueron asesinados por los sicarios de Escobar en Medellín.

La violenta arremetida de "los extraditables" y, en particular el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán (1989), quien se encaminaba a la presidencia de la República, desató una reacción fulminante del gobierno. En este ambiente fue más sencillo para las agencias del gobierno de Estados Unidos forzar al Estado colombiano a entrar definitivamente a la "guerra a las drogas".

El arribo de César Gaviria a la presidencia (1990-1994) trajo un rápido cambio conceptual y un enfoque más agresivo hacia las FARC, un frente de negociación con el M-19 y el EPL y para los narcos la "política de sometimiento a la justicia". El gobierno distinguió narcotraficante (el cartel de Cali) de narcoterrorista (el cartel de Medellín). Escobar, metido en una lucha frontal con el cartel de Cali y al igual que sus nuevos enemigos, los "Perseguidos por Pablo Escobar", los *Pepes*, se "sometió a la justicia" en 1991. Confiado en una nueva legislación de reducción de penas, a pesar de estar sindicado de ser el autor intelectual de una oleada de crímenes que incluían el asesinato de varios candidatos presidenciales, un ministro de Justicia y un procurador general de la Nación; de la demolición dinamitera de dos grandes periódicos liberales y de la sede nacional de la policía secreta, o de la explosión de un avión de pasajeros en pleno vuelo, el capo antioqueño impuso las condiciones de su cautiverio. Determinó el terreno donde debía construirse su cárcel; aprobó los planos; elaboró el reglamento interno de la prisión y, él mismo se encargó de dirigirla. "Sometido" con su plana mayor, convirtió el reclusorio (que la gente llamaba *La Catedral*) en oficina central desde la cual dirigía las operaciones corrientes de tráfico de drogas y extorsión a otros narcotraficantes. Ante las pruebas ofrecidas por la Embajada de Estados Unidos sobre la continuación de actividades desde *La Catedral*, Gaviria ordenó el traslado de Escobar en una operación que resultó sainete y expuso la farsa del "sometimiento". El capo se fugó y emprendió entonces una lucha implacable contra los *Pepes* (de ese enjambre saldrían las AUC), trató de neutralizar al gobierno secuestrando rehenes de las principales familias políticas del país y se ensañó con los Rodríguez Orejuela, sus competidores del cartel de Cali, quienes continuaron al frente del negocio a cambio de ofrecer información y ayuda logística para que el gobierno colombiano, auxiliado por varias entidades

estadounidenses, eliminaran al demonizado Escobar. En "guerra total", cada vez más debilitado por la lucha en varios frentes simultáneos, encontró la muerte en 1993 a manos de la Policía Nacional, respaldada por un equipo especial de comunicaciones de los Estados Unidos (Pardo, 1996, pp. 425-447).

En estas condiciones de inseguridad generalizada y crecimiento de homicidios y secuestros, se amplió el mercado de "seguridad privada". En buena medida las huestes paramilitares se alimentaban de policías resentidos, purgados de filas en las campañas de limpieza de esos cuerpos que empezaron durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). De lado legal se establecieron nuevas empresas a cargo de exoficiales del ejército y la policía con conexiones políticas e institucionales.

Puesto que los Rodríguez Orejuela habían colaborado con agencias del Estado en la destrucción del grupo de Escobar y, según dictámenes judiciales, fueron sustanciales contribuyentes de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998), debieron suponer que seguía una tregua de largo plazo. Pero el destape y escándalo de la financiación de la campaña de Samper consumió gran parte de las energías del gobierno, en una coyuntura de ascenso de guerrillas y paramilitares, y sirvió de pretexto a Washington para exigir la destrucción del cartel, lo que se efectuó en los años siguientes. En esta última guerra, la Policía Nacional jugó un papel central y mostró un aprendizaje institucional considerable. Si bien el grupo caleño había sido relativamente menos violento y nunca había desarrollado una infraestructura paramilitar de tamaño y agresividad semejantes a la del cartel de Medellín, al final recurrió a la retórica nacionalista y a la acción terrorista en una nueva versión de "los extraditables". Finalmente, sus jefes fueron entregados a la justicia y terminaron en cárceles de Estados Unidos. Pero, como se observó en su momento, si las victorias contra los dos grandes carteles cancelaron la emergencia de un "narco-Estado", no acabaron el negocio que, desde entonces funciona con base en "cartelitos" (Bagley, 2001).

En este punto importa subrayar que para liquidar los dos carteles fue menester centralizar al máximo. En 1989-1990 se constituyó una unidad altamente secreta y especializada, —el llamado *Bloque de Búsqueda*—, compuesta por miembros del ejército, la policía, la Fiscalía y el DAS, con apoyo de la DEA. Así se superó la fragmentación de inteligencia y operacional de diferentes unidades, aunque una parte del juego contra Escobar consistió en apoyarse en el grupo de Cali. Da la impresión de que el *Bloque*, más que una unidad en el organigrama, fue un cuerpo fluido y en cierto modo indeterminado.²⁷ Quizás allí estribó su efectividad. En el desmantelamiento del grupo

²⁷ Según Bowden, (2001, pp. 71-90), operó una unidad de inteligencia especializada en telecomunicaciones, Centra Spike, dependiente del Ejército de Estados Unidos y que fue fundamental en el desmantelamiento del cartel de Medellín.

de Cali, el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano narró cómo, con pleno respaldo del presidente Samper, "creció" la policía y desarrolló un servicio de inteligencia capaz de derrotar la contrainteligencia de los narcotraficantes. En este episodio un *Bloque de Búsqueda* del ejército jugó un papel de apoyo (Serrano Cadena, 1999, pp. 135-154).

Pese a esto, la presión norteamericana al gobierno de Samper fue incesante y traumática a través del juego de las "descertificaciones" y la revocatoria de la visa al presidente, que lo debilitaron menos que al mismo Estado colombiano (Joyce, 1999). Por esa época se trataron de restablecer infructuosamente los diálogos de paz, y los niveles de violencia asociada al narcotráfico cedieron considerablemente. Vendría ahora una nueva edición de la confrontación de los paramilitares, cada vez más poderosos, y las FARC.

La izquierda armada y el aciago experimento de la Unión Patriótica

El modesto crecimiento que había tenido el PCC a partir del Frente Nacional, se detuvo en los años ochenta; parecía pagar su ambigüedad. Mientras tanto las FARC, el ELN y el EPL se recobraban de sus divisiones internas o de los golpes sufridos a manos del ejército en la década de 1970 y surgió el M-19, "el eme", una nueva organización integrada por algunos dirigentes expulsados de las FARC y del PCC que se unieron con cuadros radicalizados de ANAPO.²⁸ Inspirado en los *Tupamaros* de Montevideo, "el eme" alcanzó la cota máxima de popularidad de su breve historia en uno de los momentos de mayor impopularidad del sistema político y del gobierno. Ofreció un menú de acciones terroristas urbanas que abrió con el robo de la espada de Bolívar de la casa-museo que lleva su nombre en Bogotá. Al poco tiempo estableció "cárceles del pueblo" donde retuvo empresarios secuestrados; puso en escena un acto de tono fascista, el secuestro y asesinato del líder histórico de la corrupta Confederación de Trabajadores de Colombia, (CTC); sustrajo unos 6000 fusiles del Cantón Norte de Bogotá y se tomó la Embajada de la República Dominicana en una celebración a la que asistían los principales embajadores y diplomáticos acreditados en Colombia. Negoció con el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) la entrega de la Embajada y la salida triunfal hacia La Habana del comando que la había tomado, obteniendo de paso cuantiosos fondos por el rescate y ganando la guerra de propaganda.

En la segunda mitad de la década, y con el aire que recibieron de la "apertura democrática" y la Ley de amnistía impulsada por la administración Betancur, (1982-1986) fueron más claros los síntomas de recomposición organizativa y militar de todas las fuerzas guerrilleras. Amnistiados, los del "eme" se apresuraron a ocupar zonas de colonización en el Cauca, Putuma-

²⁸ Cfr. Villamizar, (1995); Vásquez Perdomo, (2000).

yo y Caquetá, en una improvisada y oportunista línea "campesina" que prosiguieron durante la administración Barco (1986-1990). Sin embargo, acciones terroristas desproporcionadas, como el asalto al Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y, unos meses después, el cruel ajusticiamiento en el Frente Ricardo Franco (una disidencia de las FARC) de 160 guerrilleros, acusados de colaborar con "el enemigo", mostraron facetas alarmantes de irresponsabilidad y atrocidad y mellaron su popularidad. Además, fue ostensible la incompetencia intelectual del M-19 para elaborar algún proyecto político que rebasara un cliché que se limitaba a recoger elementos desperdigados de plataformas políticas de ANAPO, la socialdemocracia y el nacionalismo convencional de la derecha colombiana.

Al mismo tiempo, las viejas organizaciones guerrilleras penetraron movimientos sindicales, campesinos y barriales. El EPL adoptó una lucha más política operando con un llamado "Frente Popular" y el ELN salió del originario enclaustramiento foquista con "¡A luchar!", organización que trató de conectar con movilizaciones cívicas y sindicatos.²⁹

Aquí conviene hacer una digresión sobre la autopercepción de las FARC, que da luces sobre su ideología y su organización. Nada mejor para esto que los estatutos, el reglamento interno disciplinario o militar y las normas internas de comando, es decir, "lo habitual en el ejercicio diario de las distintas unidades". Según el último documento de 1993, tales disposiciones fueron "aprobadas por la Sexta Conferencia, 18-25 de enero de 1978, corregidas y ampliadas por la Séptima Conferencia Nacional de las FARC-EP, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) 4-14 de mayo de 1982. Actualizadas y modificadas por la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP, 11-18 de abril de 1993".

Los dos primeros artículos del estatuto dan a cada militante la clave con la que debe orientarse en cuanto a los valores políticos, los medios básicos y los objetivos finales de su lucha revolucionaria.

Artículo 1.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional, son un movimiento político militar que desarrolla su acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas, conforme a la táctica de combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo.

Artículo 2.- "Las FARC-EP son ante todo una organización revolucionaria. Cada Escuadra o Unidad Básica es al mismo tiempo célula política. Las FARC-EP aplican a la realidad colombiana los principios fundamentales del marxismo-leninismo y se rigen por su Plan Estratégico y Programa Revolucionario, las conclusiones de sus Conferencias Nacionales, los Plenos de su Estado Mayor Central y su Regla-

²⁹ Cf. Villarraga, (1994); Medina Gallego, (1996).

mento Interno, se inspiran en el pensamiento revolucionario del Libertador Simón Bolívar, del antiimperialismo, la unidad latinoamericana, de la igualdad y el bienestar del pueblo. También propugnan por la creación de un auténtico Ejército Bolivariano. LAS FARC-EP están a disposición y bajo el mando directo del Estado Mayor Central".

El tercer artículo, sobre la estructura, indica a cada militante cómo comportarse cotidianamente dentro de la organización. A partir de la formación leninista de "célula política", tomada del PCC, la organización presenta una estructura similar: de la *escuadra*, (nombre adoptado en el Davis) "unidad básica" de doce hombres, (claro que cada vez hay más mujeres) se sube a la *guerrilla*, formada por dos *escuadras*; dos *guerrillas* forman una *columna*; dos o más *columnas* configuran un *frente*. A cada una de estas unidades había que añadirles sus mandos respectivos. Los de los *frentes* eran designados por el *Estado Mayor Central*. Cinco o más *frentes* forman un *bloque*. La reglamentación meticulosa de la jerarquía da cuenta de la preocupación de los dirigentes por disponer de un sistema de control, en particular del crecimiento mismo de la organización.

Con base en una lectura del articulado a la luz de la geografía nacional, los investigadores Ferro Medina y Uribe Ramón ofrecieron una de las mejores descripciones de las FARC del tiempo del Caguán (2002, pp. 42-55). Ahora bien, es evidente que los estatutos farianos son copia de los del PCC, tanto en las líneas verticales como en la cobertura territorial.

Con el correr de la década de 1990 se reanudó el culto oficial a las contabilidades de la violencia que había empezado en los albores del Frente Nacional.³⁰ Con autoridad académica que nadie puso en duda se dijo que:

[...] en los últimos diez años (1986-1996) la guerrilla ha crecido más que en los treinta y dos años anteriores [...]. Las FARC, por ejemplo, pasaron de cerca de 3600 hombres y 32 frentes en 1986, a aproximadamente 7000 hombres y 60 frentes en 1995; el ELN, por su parte, en ese mismo período pasó de 800 hombres y 11 frentes a 3000 hombres y 32 frentes. Y no parece que esa tendencia se haya revertido (Rangel Suárez, 1996, p. 74).

³⁰ El formato de los informes de la PN que se emplean adelante, en el capítulo 4 aparece primero en los "Informes de Orden público" del Ejército Nacional hacia 1958. Lo mismo el formato e importancia atribuida a la contabilidad de los cadáveres de bandidos. Ver, AGN, Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 3, carpeta 19, 1958-1960. Por formato se entiende aquí la información sistemática de cada incidente reportado: departamento, municipio, fecha, hora, sitio exacto: vereda, corregimiento, vía, perímetro urbano, zona urbana; el actor, que casi siempre es bandolero, cuadrilla, con alias y tipo de acción, asalto, asesinato, robo. Pero en general trae la filiación política de la víctima: liberal, conservador, comunista.

Poco a poco, se velaron expresiones cautelosas, de tanteo, como "cerca de", "aproximadamente" y, aunque se trabajó con base en conjeturas, quedó la idea de cantidades demostradas. Con cifras como estas se subrayó el acelerado crecimiento de las guerrillas con base en el "desdoblamiento de frentes".

Aunque las FARC no eran partido político, ni "brazo armado", hacia mediados de la década de 1980, por los años del Acuerdo de la Uribe, decidieron transformarse en una organización militar capaz de formar su propio partido. Unos diez años después, en la revista del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, el comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, reiteró la tesis de "crecer en hombres y partido":

Las perspectivas para el desarrollo del movimiento guerrillero son buenas si la actual situación de crisis de los partidos, de todas las estructuras del Estado y las carencias del pueblo las sabemos aprovechar, movilizandolos hacia objetivos políticos, económicos, sociales y contra "la violencia" oficial. Creciendo en hombres y partido. Preparando las Milicias Bolivarianas y Populares en centros urbanos, pueblos, caseríos, municipios, regiones y veredas para hacerle frente al Terror de Estado y al paramilitarismo con grandes y pequeñas unidades, utilizando toda clase de armas a nuestro alcance, lo importante es que las masas no se sigan dejando masacrar pasivamente.³¹

Imposible no advertir la tensión que subyace en este diagnóstico entre la fuerza guerrillera y la población simpatizante que cae "pasivamente". Con la idea de "crecer partido" [sic.] organizaron primero el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC), y, poco después, el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, (MB). Así, la estructura organizacional de las FARC pareció recargarse de instancias entre la cúpula y la base y empezó a soportar las tensiones propias del crecimiento de militantes sin formación política o ideológica y las exigencias logísticas de una expansión territorial imposible de planear.³² Es probable que el PCCC y el MB, más o menos similares en cuanto a su estructura y funciones, aceleraran el recalentamiento de la organización en su conjunto. El carácter absolutamente clandestino de las dos nuevas organizaciones, acentuó la orientación cerrada y vertical, cada vez más táctica y menos estratégica, más y más alejada de la "línea de masas", especialmente en territorios poco consolidados.

Volviendo a la conjetura del desdoblamiento de frentes a partir de 1982, con todo y el sentido propagandístico, parece razonable. En 1996 las FARC demostraron capacidad de concentrar fuerzas en puntos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, suficiente para copar bases militares de cierta importancia. Esto se advierte en 16 acciones emprendidas en 1996 contra la im-

³¹ *Resistencia*, núm. 112, mayo-junio de 1997, p. 6.

³² Al respecto ver, por ejemplo, el organigrama en Ferro Medina & Uribe Ramón, (2002, p. 44).

portante base de la policía en la cabecera de Miraflores, Guaviare, que culminaron con una operación que dejó la población en escombros o en la destrucción de la base militar de Las Delicias, Caquetá, por la "Columna Arturo Medina del Bloque Sur" el 30 de agosto de aquel año. Después de un combate de 15 horas la base quedó arrasada y las FARC reportaron que causaron la baja de 27 soldados muertos, 16 heridos y 60 "prisioneros de guerra"³³ que, posteriormente, entregarían al gobierno como un requisito previo a una negociación con "zona de despeje". Del 30 de agosto al 2 de septiembre de ese año, las FARC coordinaron todo tipo de ataques a puestos de policías, bases militares, infraestructura física, en particular al transporte terrestre. La capacidad de coordinación fue manifiesta en 1997 y 1998 en los golpes a la base militar del cerro Patascóy, el sitio del Billar, donde destruyeron una unidad profesional contraguerrillera y la toma de Mitú, a comienzos de noviembre de 1998, que marcó el punto de inflexión militar al no poder sostener la posición por más de 72 horas, aunque ocasionaron considerables bajas a la fuerza pública.

Esta capacidad llevó a suponer la factibilidad del plan fariano de dominar la Cordillera Oriental para sitiar la capital colombiana. Estos vaticinios alarmistas suponían que el método de desdoblamiento de frentes por el territorio nacional estaba destinado a "fragmentar el ejército". Aunque no cabe duda de que la amplitud de la cobertura geográfica de las FARC, cuando menos una tercera parte de los frentes, o sea unos 20, presentan una hoja de servicios lamentable en cualquier organización, al punto que puede preguntarse si existían o hacían parte de la vieja malicia guerrillera de inflar fuerzas.³⁴ Sin embargo, algunos frentes se especializaron en secuestros, y otros, ante la ausencia de una policía vial moderna y eficiente, golpeaban las infraestructuras de transporte y carreteras o, emulando al ELN, volaban oleoductos.³⁵ Pero no cabe duda de que al comenzar el proceso del Caguán, en 1998, pese a su fortaleza militar, las FARC empezaban a retroceder ante el avance paramilitar en Urabá y el Magdalena Medio.

En efecto, en la década de 1980 las FARC salían del empantanamiento y aprovechaban las nuevas oportunidades abiertas en tierras de frontera extractiva, generalmente de bajas densidades humanas y pésimas infraestruc-

³³ *Resistencia Internacional*, mayo-junio de 1997, [separata], pp. 13-14.

³⁴ *Resistencia Internacional*, [separata].

³⁵ Uno de los tópicos más socorridos en la prensa de esa época era el "empate" del ejército y la guerrilla. Ver por ejemplo: *Cambio 16*, núm. 110, (17 de julio de 1995). "La guerrilla millonaria", pp. 38-46; *Cambio 16*, núm. 204, (12 de mayo de 1997). "Nuestra Ruanda", pp. 16-19; *Semana*, (10 de febrero de 1997). "Novedad en el frente. La última ofensiva de la guerrilla deja al descubierto las debilidades del Ejército para enfrentar una guerra abierta contra la subversión", pp. 29-31; *Semana*, (13 de agosto de 1996). "El cartel del secuestro. Los rescates pagados a esta industria criminal llegan a los 550 000 millones de pesos en el último año", pp. 24-25; *Semana*, [Especial], (14 de septiembre de 1996). "¿Economía de guerra?"

turas de transportes, ganando pie en estas y en nichos limítrofes con Venezuela, Panamá y Ecuador. Aunque fuentes oficiales calcularon que cerca del 60% de los municipios colombianos experimentaron en 1996 alguna forma de "presencia guerrillera" (Echandía & Escobedo, 1994), sin calificar ni discernir su significado, lo cierto es que, en esta fase, la expansión guerrillera dependió de la reorientación del modelo económico colombiano y de las políticas de pacificación.

Como se anotó, en desarrollo de los Acuerdos de Paz de la Uribe (mayo de 1984) en alianza con el PCC, las FARC fundaron en 1985 la Unión Patriótica, (UP). En las elecciones de 1986, sola o en coaliciones, obtuvo 350 concejales, 23 diputados, 9 representantes y 6 senadores. Sola ganó 16 alcaldías. Este resultado reavivó los temores de una revolución armada en amplios sectores de las Fuerzas Armadas, educados en la doctrina de la contrainsurgencia, cuyo vocero principal era el ministro de Defensa, general Fernando Landa-zábal Reyes. Empresarios y nuevos y viejos señores rurales también se sintieron amenazados. Lo que nadie pudo apreciar con claridad en el momento fue el cambio de correlación de fuerzas con la irrupción de organizaciones de narcotraficantes en el mundo del latifundismo ganadero que, en casos, se expandía a costa de tierras campesinas, especialmente en zonas de colonización reciente y presencia guerrillera, como el Magdalena Medio o el eje Córdoba-Urabá.³⁶ En estos vaivenes, 1987 fue el año fatídico de la ruptura del matrimonio de conveniencia de las FARC y el ala militar del cartel de Medellín al mando de Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano", quien abrió una campaña de exterminio contra la UP, blanco más fácil que las FARC. Este fue el inicio de un acoso implacable que dejaría unos 3000 militantes asesinados, la mayoría cuadros del PC, y en desbandada la organización. Vista en conjunto fue una operación descentralizada de redes ocasionales de base municipal y diversa composición (narcotraficantes, paramilitares, políticos, fuerza pública) distribuidas por todo el país. Emergió un patrón en que los paramilitares terminaron haciendo labor de zapa contrainsurgente, aterrizaron y liquidaron las bases —reales o supuestas— de apoyo popular de la UP y las FARC, para que pudiera entrar la fuerza pública y copar los espacios. Sin embargo, en algunas zonas "limpias de subversión", la dinámica del negocio de estupefacientes erigió enclaves autónomos.

³⁶ Cfr. Medina Gallego, (1990, pp. 142-194); Palacios & Safford, (2002, pp. 660-661); CINEP, (1990); Medina Gallego & Téllez Ardila, (1994); Medina Gallego, (1990, pp. 127-231).